

NACIONES UNIDAS

Asamblea General

CUADRAGESIMO QUINTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

COMISION POLITICA ESPECIAL
23a. sesión
celebrada el lunes
26 de noviembre de 1990
a las 15.00 horas
Nueva York

ACTA TAQUIGRAFICA DE LA 23a. SESION

Presidente: Sr. KARUKUBIRO-KAMUNANWIRE (Uganda)

SUMARIO

TEMA 34 DEL PROGRAMA: POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA: AUDIENCIAS

La presente acta está sujeta a correcciones.

Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Distr. GENERAL
A/SPC/45/PV.23
29 de noviembre de 1990
ESPAÑOL

Se abre la sesión a las 15.20 horas.

TEMA 34 DEL PROGRAMA (continuación)

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA: AUDIENCIAS

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Como recordarán los miembros, la Asamblea General decidió con respecto al tema 34 del programa, "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica", que se considerará directamente en el plenario, que las organizaciones y personas con un interés especial en la cuestión del apartheid podrían intervenir en la Comisión Política Especial. En nuestra segunda sesión, el 9 de octubre, la Comisión decidió fijar el 15 de noviembre como plazo para la presentación de solicitudes de audiencia y considerar todas las solicitudes que se recibieran hasta esa fecha en una sesión previa a las audiencias. Las solicitudes figuran en los documentos A/SPC/45/L.3 y Adds.1 a 8, y fueron posteriormente aprobadas por la Comisión en la 16a. sesión, el 19 de noviembre.

siguiendo la práctica anterior, propongo que la Comisión solicite actas taquigráficas de estas audiencias.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Solicito a todos los oradores que participen de las audiencias en relación con el tema 34 del programa que limiten sus comentarios a la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica.

Doy la palabra a la Sra. Beatrice von Roemer, representante de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

Sra. von ROEMER (interpretación del inglés): En nombre de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que representa a más de 99 millones de trabajadores en 101 países, deseo dar las gracias a la Comisión Política Especial por brindarnos una vez más la oportunidad de presentar información adicional sobre la situación del movimiento sindical en Sudáfrica.

En el tiempo transcurrido desde la última vez que comparecimos ante esta Comisión, se han registrado grandes cambios en el mundo e, inclusive, se vislumbra finalmente en Sudáfrica un destello de esperanza. Sin embargo, debemos precavernos contra un exagerado optimismo para no bajar la guardia prematuramente. Mucho queda por hacer y las tácticas dilatorias son demasiado evidentes.

A comienzos de este año, las dos principales federaciones sindicales, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) y el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU), y la organización patronal, el South African Employers' Consultative Committee on Labour Affairs, acordaron una serie de propuestas para enmendar la Labour Relations Amendment Act. Sin embargo, el Gobierno no presentó estas propuestas al Parlamento. Luego, en el mes de agosto, se reanudaron las negociaciones en un comité tripartito. A principios de septiembre, el COSATU y el NACTU anunciaron que organizarían un movimiento de masas durante tres días, si no se llegaba a un acuerdo. Posteriormente, las dos federaciones sindicales y la federación patronal se reunieron con el Ministro de Recursos Humanos, alcanzando finalmente un acuerdo. El mismo incluye el compromiso del Gobierno de presentar enmiendas legislativas al Parlamento en febrero próximo. También se comprometió el Gobierno a dar prioridad a la situación de los trabajadores agrícolas, domésticos y públicos, así como a sondear la manera en que estos pueden quedar comprendidos en los derechos laborales, pues hasta ahora han estado al margen de la Labour Relations Amendment Act y de otras leyes pertinentes.

La situación de los trabajadores agrícolas es sumamente grave. En los últimos seis meses se produjo una serie de disputas industriales que afectaron a los trabajadores agrícolas. Una de las principales disputas se inició a comienzos de agosto en la plantación de cítricos Zebediela, una compañía del Transvaal oriental, oportunidad en la que fueron a la huelga 1.500 miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, tras el fracaso de las negociaciones por un aumento salarial. Los patronos respondieron con el despido de los trabajadores. En negociaciones recientes, ofrecieron reincorporar sólo a 800 de los 1.000 trabajadores y hasta ahora el sindicato ha rechazado este ofrecimiento. El NACTU, al que está afiliado el sindicato,

exhortó a boicotear la plantación de cítricos, exhortación a la que respondieron varias organizaciones políticas y estudiantiles.

Otro caso se produjo en una compañía del Transvaal oriental en la que 3.000 trabajadores fueron despedidos tras una disputa salarial que dio lugar a una huelga. La patronal aplicó una orden del Tribunal Supremo de expulsar a los trabajadores de la plantación. En el caso de algunos trabajadores, se trataba del único hogar que conocían, pues habían nacido en esa plantación. Sin embargo, se llegó a un acuerdo extrajudicial y se ha informado que los trabajadores han sido empleados de nuevo.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y las organizaciones afiliadas seguirán vigilando de cerca la situación sindical de Sudáfrica. Seguiremos atentos hasta que el Parlamento sudafricano apruebe las enmiendas acordadas a la Labour Relations Amendment Act y hasta tanto se extiendan los derechos sindicales a todos los trabajadores, incluidos los empleados públicos y los trabajadores domésticos y agrícolas. Se prestará especial atención a la situación laboral de estos últimos.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres está gravemente preocupada por el reciente brote de violencia, concentrado en Natal. No hay duda de que existen elementos de extrema derecha que se aprovechan de la situación. Hasta el Presidente De Klerk estuvo de acuerdo en que había una modalidad de violencia que apuntaba a la presencia de una "tercera fuerza", con asesinos profesionales altamente capacitados.

Los trabajadores se han visto afectados por esta violencia más que ningún otro sector de la población. Ello ha tenido un impacto mayor en la actividad económica, porque los trabajadores se han quedado en sus hogares para protegerse a sí mismos y a sus familias. También se han limitado gravemente las actividades sindicales. Muchos dirigentes sindicales han sido objeto de ataques y han debido pasar a la clandestinidad.

El Presidente De Klerk ha hecho una campaña enérgica para convencer a los gobiernos extranjeros de que el cambio en Sudáfrica ahora es irreversible. Sin embargo, hasta el momento las negociaciones sobre el futuro de Sudáfrica ni siquiera han empezado todavía. Pero, cuando empiecen, y si eventualmente se logra un acuerdo entre las partes, éste se va a enviar a la aprobación de la minoría blanca. Habida cuenta de la disposición de ánimo y la opinión actuales, puede suceder cualquier cosa. Por lo tanto, sería prematuro que la comunidad internacional mermara su apoyo a la mayoría negra en Sudáfrica.

Mientras tanto, si bien se ha eliminado por fin el estado de emergencia, esto ha tenido poco efecto práctico debido a otra serie de leyes tales como la Ley de Seguridad Interna, la Ley de Seguridad Pública y las Defence and Police Acts, que permiten al Gobierno hacer frente a los disturbios. La única diferencia que existe es que las autoridades tienen que seguir procedimientos un poco más delicados y largos y los funcionarios involucrados no gozan de impunidad total como en el estado de emergencia.

El Gobierno de Sudáfrica ha anunciado que la Ley sobre zonas reservadas, que define dónde puede vivir la gente conforme a su grupo racial, y las leyes relativas a la propiedad de la tierra, que restringen la propiedad de la tierra debido a la raza, se van a eliminar el año entrante. Esto todavía dejaría vigente un gran pilar del sistema de apartheid que es la Ley de inscripción de la población, que clasifica a la gente conforme a la raza. El Gobierno entiende que esta Ley es inseparable de la Constitución actual y que se va a eliminar cuando se apruebe una nueva Constitución. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y sus

afiliados tienen la intención de emprender una campaña enérgica para la eliminación inmediata de la Ley de inscripción de la población y de todas las leyes, clasificaciones y políticas con base racial en Sudáfrica.

Respecto al regreso de los refugiados políticos, el Gobierno no ha cumplido con su parte en el acuerdo logrado con el Congreso Nacional Africano (ANC) y ha pedido que los exiliados declaren qué delitos han cometido en Sudáfrica, inclusive el haber dejado el país sin pasaporte, que fue lo que hizo la mayoría. En septiembre se informó que el ANC había dado al Gobierno una lista para la repatriación de 3.000 personas, pero hasta fines de octubre no se había recibido ninguna noticia respecto a cuándo iban a poder regresar.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres apoya la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional, aprobada por unanimidad por la Asamblea General en su 16° período extraordinario de sesiones, y apoya también la resolución 44/244, aprobada recientemente, que determina que el régimen sudafricano debe tomar medidas ulteriores para aplicar los cambios profundos e irreversibles que se piden en la Declaración. El alivio de la presión internacional en este momento sólo podría debilitar a la mayoría negra y alentar al Gobierno de Pretoria a llevar a cabo tácticas dilatorias. Por lo tanto es esencial que se mantengan las sanciones existentes.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres continuará dando el máximo apoyo al movimiento de sindicatos laborales democráticos en Sudáfrica para permitirles crecer, fortalecerse y prepararse para desempeñar un importante papel como integrante de carácter social en una nueva Sudáfrica democrática y no racista.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El próximo orador es la Sra. Donna Katzin, del Interfaith Center on Corporate Responsibility.

Sra. KATZIN (interpretación del inglés): Como Directora de Programas para Sudáfrica del Interfaith Centre on Corporate Responsibility (ICCR), deseo expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad que se me brinda hoy de hacer uso de la palabra aquí.

Actualmente estamos pasando por uno de los momentos más precarios en la historia de Sudáfrica. Es el período de más progresos y mayores esperanzas para un final negociado del apartheid y, sin embargo, el país se ha visto atormentado por la violencia política más brutal de los últimos decenios. Ha habido más reformas de las que el país ha visto en los últimos años. No obstante, las leyes que son los pilares del apartheid permanecen arraigadas firmemente. Los movimientos de liberación sudafricanos estiman que en el mes de septiembre todavía se encontraban en la cárcel entre 2.500 y 3.000 presos políticos, y que continuaban las detenciones cotidianas en las que se incluía a niños menores de 18 años.

Más desalentadora aún es la doble política que lleva a cabo Pretoria. Si bien el Presidente De Klerk ha abogado en pro de reformas y negociaciones, una gran variedad de organizaciones internacionales han documentado una cooperación estrecha entre la policía sudafricana y los vigilantes que cometen atrocidades en todo el país.

Dentro del país, la cooperación entre los agresores y las fuerzas gubernamentales ha sido documentada por el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), por muchas otras organizaciones y por el South African Council of Churches. El Secretario del South African Council of Churches, Reverendo Frank Chikane, dijo claramente: "La policía está involucrada en los asesinatos perpetrados contra nosotros".

La comunidad internacional tiene que desempeñar un papel clave en esta instancia crítica. Sin una presión internacional enérgica y sostenida, es probable que el progreso alcanzado hasta ahora en Sudáfrica diste trágicamente de su objetivo y que se hayan malogrado los sueños de una democracia que no discrimine raza ni sexo.

La propia posición de las Naciones Unidas resulta ahora tan pertinente como lo fuera en diciembre pasado, cuando la Asamblea General aprobó su Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional. Como ustedes saben, en su Programa de Acción, esta Declaración resolvió:

"Velar por que la comunidad internacional no mitigue el rigor de las medidas existentes para inducir al régimen de Sudáfrica a erradicar el apartheid hasta que haya pruebas claras de cambios profundos e irreversibles, teniendo presentes los objetivos de la presente Declaración." (resolución S-16/1, párr. 9 e))

Desde aquella Declaración, el South African Council of Churches ha proporcionado la norma más útil para definir el "cambio irreversible", tanto más necesaria cuanto que los Gobiernos de Sudáfrica y de los Estados Unidos han optado por ese término para inflar el significado de las reformas parciales de Pretoria y allanar el camino para eliminar o mitigar las sanciones internacionales.

El 6 de octubre de 1990, el South African Council of Churches declaró:

"El desmantelamiento del apartheid será irreversible sólo cuando:

- i) se establezca una Asamblea Constituyente; ii) se quite el poder soberano a las estructuras legislativas existentes del apartheid y se le otorgue a una Asamblea Constituyente o a otra estructura interina convenida; y iii) la minoría blanca no pueda invertir o vetar legalmente el proceso de cambios mediante las actuales estructuras legislativas no representativas."

Conforme a estos criterios, y a los de otras organizaciones internacionales en contra del apartheid, los cambios en Sudáfrica distan mucho de ser irreversibles. En este contexto, la Asamblea General, con arreglo a su propia Declaración, debe mantener la presión internacional contra el sistema de apartheid.

Es algo dudoso que esas presiones económicas internacionales hayan tenido un impacto sustancial sobre Sudáfrica. En su conjunto, han causado la salida de Sudáfrica de una corriente neta de capital de 14.000 millones de dólares desde 1985; han reducido el intercambio con el exterior; han causado un marcado estancamiento tecnológico; y han reducido la tasa de crecimiento de Sudáfrica al 1,5% que se anticipa para 1990, muy por debajo del 5% ó 6% que se necesita sólo para hacer frente al crecimiento de la fuerza de trabajo negra en el país.

Debido a las restricciones de nuevos capitales para Pretoria, y a los tres acuerdos sucesivos para la refinanciación y el pago de la deuda sudafricana, de 24.000 millones de dólares, la economía del apartheid ha caído bajo el peso de sus préstamos del exterior. Estas obligaciones multiplican el efecto de las sanciones existentes sobre los nuevos préstamos y el comercio, pues entre 1985 y 1989 han drenado 7.000 millones de dólares o más de las reservas de capital disponibles para el pago de la deuda de Pretoria.

En un reciente estudio, el Investor Responsibility Research Centre informó que la política sudafricana había tenido como consecuencia un estancamiento tecnológico, "un aumento muy pequeño de la productividad" y "casi ninguna eficacia". En el peor de los casos, dijo que Sudáfrica "se había vuelto menos eficaz". El Investor Responsibility Research Centre calcula que hoy, si el país hubiera puesto fin al apartheid, su economía sería de un 20% a un 35% más alta que la actual, como consecuencia de su política de autodestrucción económica.

Sudáfrica experimentó el año pasado una recesión pequeña, más allá de la que es endémica en la ineficiencia del apartheid. Si bien se produjo una mejora en el balance nacional de pagos a principios del año, los dirigentes angloamericanos han indicado que la recuperación económica demanda una baja de la inflación y un aumento de las reservas de divisas extranjeras. Con el aumento reciente del precio del petróleo, como consecuencia de la crisis del Golfo Pérsico y las sanciones existentes, esta mejora parece poco probable.

En realidad los conflictos en el Golfo Pérsico sólo han ampliado el impacto de las sanciones actuales. Como resultado del embargo internacional del petróleo, Sudáfrica debe pagar una "prima del apartheid" al comprar petróleo más caro al contado en el mercado. Mientras tanto, su economía desequilibrada depende de las exportaciones de oro, que constituyen aproximadamente un 40% de sus ingresos de exportación, lo que hace necesario generar un equilibrio suficiente de pagos para repagar sus deudas, pero la inestabilidad del apartheid y las sanciones internacionales sobre préstamos e inversiones, ha hecho su situación aún más difícil. Por lo tanto, la suerte económica de Sudáfrica depende en gran medida del precio del oro y del petróleo.

Hacia fines del año pasado, el embargo internacional de petróleo había costado a Sudáfrica más de 25.000 millones de dólares, desde que fue declarado en 1979. Analizando el lento aumento del oro en el mercado y el alto costo del petróleo, End Loans to South Africa informó que la crisis del Golfo ha aumentado el costo neto para Sudáfrica de las sanciones actuales en otros 2.500.000 dólares por día.

Esta tendencia recalca la importancia de mantener con firmeza en su lugar todas las presiones internacionales, incluido el embargo del petróleo y las

sanciones financieras. Sin embargo, todos nos damos cuenta con tristeza de que hay bastantes deficiencias en nuestras medidas nacionales e internacionales que permiten a las empresas transnacionales y a los bancos pasar por alto las prohibiciones y mantener su apoyo económico al sistema del apartheid. Si nuestras sanciones han de ser verdaderamente eficaces a corto plazo, cuando todavía es posible un cambio pacífico en Sudáfrica, deben cerrarse estas brechas en esas sanciones como sigue.

En primer lugar, mediante sanciones globales. Si bien las sanciones de una serie de países desalientan o prohíben nuevas inversiones en Sudáfrica, pocos piden que las empresas corten sus vínculos no equitativos. Estos acuerdos en materia de licencias, distribución, tecnología y ventas aseguran un abastecimiento continuo de bienes, servicios y tecnología que alientan a la economía del apartheid y reducen el impacto de las otras sanciones.

En virtud de tales arreglos, compañías estadounidenses tales como la IBM, la UNISYS y Control Data, compañías japonesas tales como Hitachi, y fabricantes italianos, incluyendo Olivetti, continúan aportando computadoras y programas del extranjero, de los cuales depende la economía sudafricana. Mientras la tecnología de estas transnacionales pueda fluir a Sudáfrica, el impacto de las demás sanciones se verá diluido.

La legislación local en ciudades como Nueva York y Chicago ha empezado a cerrar estas posibilidades al prohibir las transacciones con empresas que mantienen tales vínculos con Sudáfrica. Como consecuencia de estas leyes, la Xerox anunció en agosto pasado que iba a unirse a las filas de Honeywell, Motorola y NYHEX y se comprometió a no renovar sus acuerdos con Sudáfrica cuando venzan, a menos que se haya eliminado para entonces el apartheid.

Durante los meses venideros también será importante que los Estados Miembros respeten y no socaven los esfuerzos mutuos de los demás para mantener las sanciones. Dado que Alemania y el Japón son los dos asociados comerciales mayores de Sudáfrica, tendrán que actuar con mucha cautela para no socavar o tomar ventajas comerciales injustas de las sanciones impuestas por países como los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta los objetivos de las actuales sanciones, también es necesario que los Estados Miembros apliquen sus sanciones de manera que allanen el camino para que la mayoría sudafricana pueda participar plenamente

en las negociaciones acerca de su propio futuro. Los sindicatos sudafricanos apoyan el principio de la desinversión justa que respalde el derecho de los obreros durante ese proceso.

Esta campaña es esencial en momentos en que una serie de empresas multinacionales, tales como la American Cyanamid y Ciba-Geigy en la industria química sudafricana, han tomado la ofensiva para socavar los derechos sindicales sudafricanos, sus beneficios y poderes. Un procedimiento de desinversión justa apoya el intento de las actuales sanciones para ayudar a la mayoría negra de Sudáfrica a que mantenga el esfuerzo y el reconocimiento necesarios para desempeñar un papel importante en futuras negociaciones para forjar la economía política de un país democrático.

En segundo lugar, mediante sanciones financieras. Si bien los Estados Unidos prohíben nuevas inversiones y préstamos a la Sudáfrica del apartheid, estas sanciones han sido erosionadas por las acciones de una serie de bancos de los Estados Unidos. El Citibank, el Chase Manhattan y el Manufacturers Hanover Trust han convertido entre el 45% y el 100% de sus préstamos pendientes a corto plazo en préstamos a 10 años. Más de la mitad de los préstamos concedidos por los bancos británicos, tales como el Barclays, el Standard Chartered y el National Westminster, también fueron convertidos de manera similar. Esos bancos han aportado el equivalente funcional de nuevos préstamos que disminuyen sustancialmente el efecto financiero de otras sanciones. También mantienen vínculos bancarios que facilitan el comercio exterior sudafricano, socavando así el impacto de las sanciones comerciales.

Una serie de bancos europeos también ha planteado una ofensa aún más directa a las medidas destinadas al aislamiento financiero de Pretoria. Los bancos suizos han ayudado a Sudáfrica a superar las restricciones internacionales ofreciéndole préstamos en oro e intercambio en oro. Hay pruebas de que durante el año pasado habían aumentado los créditos comerciales a corto plazo y prorrogado los préstamos pendientes a Sudáfrica. El German Commerzbank actuó como agente para la emisión de bonos ESCOM, mientras que la Swiss Bank Corporation facilitó la emisión de deuda sudafricana que sirvió para refinanciar una emisión anterior de los servicios de transporte sudafricanos.

Finalmente, y quizás lo más importante en este aspecto, debiera requerirse de las instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interacional (FMI), que tuviesen cada vez más cuidado de no sabotear las presiones financieras de los Estados Miembros con la concesión de nuevos préstamos a Sudáfrica. Frente a la reciente reunión del FMI para examinar la condición de la economía sudafricana y el intento del Banco Mundial de establecerse en Sudáfrica como una base para operaciones regionales, ha sido motivo de grave preocupación que esos organismos puedan encontrar los medios para realizar nuevos préstamos prematuros al Gobierno del apartheid y legitimar acciones similares de otros bancos y naciones.

En tercer lugar, mediante sanciones específicas como el embargo petrolero. Pese al impacto tan notable del embargo petrolero internacional, que ha costado a Sudáfrica 25.000 millones de dólares más en sus pagos de petróleo crudo, se requieren medidas internacionales adicionales para hacer cumplir las medidas vigentes. Los comerciantes petroleros, como Marc Rich y la Africa Middle-East Petroleum Company, y las compañías transportadoras como Shipping Worldwide, de Hong Kong, y Greece, del Grupo Lívanos-Carras, continúan infringiendo el embargo internacional de petróleo a través del suministro de este producto a la Sudáfrica del apartheid. Estas empresas han reemplazado a los transportadores noruegos, que dejaron de transportar crudo a Sudáfrica cuando el Gobierno noruego prohibió tales embarques en 1987. Para que el embargo sea eficaz, ahora cuando es más necesario, también deben prohibirse tales envíos.

En cuarto lugar, y finalmente, mediante el examen de la cuestión de los desechos tóxicos. Estos desechos son una contribución final y genocida a la economía del apartheid. El año pasado los científicos internacionales desenmascararon a las empresas internacionales que participan en el traslado de desperdicios peligrosos a Sudáfrica y en su procesamiento de una forma que terminan envenenando el agua potable y el agua de irrigación de las comunidades negras de los alrededores. Regularmente, American Cyanamid exporta millones de toneladas de desperdicios tóxicos para ser tratados por la planta Thor Chemical, de propiedad británica, en Sudáfrica. Las muestras extraídas de esta planta revelaron una contaminación peligrosa que excede en

más de 8.000 veces las normas norteamericanas para los desechos tóxicos. La contaminación de las aguas en las proximidades del río Mgeveni, la principal fuente de agua del territorio de Kwa Zulu y de gran parte de Natal, era 7.500 veces superior a los niveles peligrosos de desechos.

Apenas el mes pasado, un funcionario de prensa del departamento sudafricano de asuntos del medio ambiente aclaró que si bien su departamento ha prohibido la importación de desperdicios a Sudáfrica, Thor Chemical importó desperdicios de mercurio que no se consideran como tales, sino como materia prima. Si la comunidad internacional ha de garantizar que la mayoría oprimida de Sudáfrica sobreviva para ver el día de su propia libertad, debe tomar medidas inmediatas para impedir el ulterior envenenamiento de las comunidades africanas.

Para terminar, cuando Nelson Mandela se dirigió al Parlamento Europeo, el 13 de junio de este año, declaró claramente:

"Se impusieron sanciones como un medio pacífico para garantizar el fin del sistema del apartheid. Como ya dije, este resultado aún no se ha logrado. Por lo tanto, es absolutamente lógico que las sanciones existentes deban mantenerse presentes. Me gustaría formular una seria advertencia en cuanto a que cualquier retroceso en esta cuestión amenazará al propio proceso de negociaciones."

En este momento crítico, aquéllos que están comprometidos con el fin rápido y decisivo del apartheid no pueden sino mantener, aplicar y verificar las políticas y decisiones adoptadas hasta el logro de su objetivo deseado. Sólo así podremos apoyar la justa y auténtica lucha del pueblo sudafricano por su propia liberación. Sólo entonces podremos garantizar que el apartheid será erradicado y una Sudáfrica no racista, no sexista y democrática tomará el lugar que le corresponde en la comunidad de las naciones.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Tiene la palabra el representante de la Association of Concerned Taxpayers, Sr. Bryce Hallowell.

Sr. HALLOWELL (interpretación del inglés): La Comisión Política Especial está llevando a cabo una misión larga y potencialmente fructífera para obtener una mayor comprensión de las circunstancias que provocaron la tragedia sudafricana conocida como apartheid. Sus hallazgos deben ayudar a formular la nueva política de las Naciones Unidas, habida cuenta de las circunstancias que han conducido a una nueva Sudáfrica en la que la democracia va a reinar suprema.

El país es drásticamente diferente del que visitó esta Comisión en sus audiencias el pasado año y, por tanto, el papel de las Naciones Unidas también debe ser diferente. Nunca se puede olvidar el pasado y deben aprenderse sus lecciones pero, por primera vez en muchos años, el futuro de Sudáfrica es alentador y los sueños de su pueblo ofrecen esperanza para un nuevo comienzo. Les deseo gran éxito en su camino para hallar soluciones a los problemas restantes de Sudáfrica después del apartheid.

Agradezco la oportunidad de dirigirme a esta distinguida Comisión y he escuchado con interés los comentarios efectuados durante este debate. El dilema de Sudáfrica no tiene ninguna solución rápida o una resolución claramente identificable; sin embargo, es una cuestión que sigue siendo prioritaria, no sólo para las Naciones Unidas sino también para muchos gobiernos de todo el mundo.

Los vericuetos de la historia de Sudáfrica han dejado a muchas personas con una sensación de desesperación absoluta. Las profundas complejidades que son únicas de Sudáfrica hacen que la solución de sus problemas sea mucho más difícil que lo que parece a simple vista. La violencia y la depresión han sido una forma de vida para demasiados sudafricanos durante demasiado tiempo. El tribalismo, el racismo, las tensiones étnicas y la carencia económica han creado un clima cultural muy inflamable que puede estallar en cualquier momento con la chispa más pequeña. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo se está ofreciendo a todos los sudafricanos la esperanza real de que puedan tener un futuro de democracia y la promesa de un mañana mejor.

El último año ha demostrado ser realmente histórico y servirá como el nuevo principio que todos los sudafricanos han deseado durante tanto tiempo. Los cambios que se están produciendo casi a diario han impulsado a Sudáfrica a áreas nuevas e inexploradas. Se ha legalizado a partidos políticos como el Congreso Nacional Africano (ANC), la Organización del Pueblo Azanio (AZAPO), el Movimiento Inkatha y otros, que ofrecen una alternativa a los ciudadanos del país. Los pilares tan conocidos del apartheid: las leyes de pases, la Ley de reservación de instalaciones separadas, las leyes relativas a la propiedad de la tierra, la Ley sobre zonas reservadas y otras se han desmoronado con la misma velocidad e intensidad que los gobiernos comunistas de Europa oriental. Pero si bien el mundo ha celebrado los acontecimientos de Checoslovaquia, Alemania, Polonia, la Unión Soviética y otros lugares, se han recibido los cambios en Sudáfrica con críticas, escepticismo y ostracismo. Esta Comisión elaborará un informe para la Asamblea General sobre la situación en Sudáfrica y debe encontrar que realmente se han producido cambios dramáticos. También debe recordar que estas reformas se han aplicado con la esperanza de recibir aliento de la comunidad mundial para que los dirigentes de Sudáfrica puedan mostrar al pueblo evidencias concretas de que estos cambios ayudarán a mejorar la situación del país. No todos los sudafricanos están de acuerdo con la apertura de la sociedad y estas fuerzas juzgarán rápidamente si las mejoras no son rápidamente identificables. La derecha conservadora espera que las reformas de Sudáfrica fracasen para crear confusión y permitirles mantener durante más tiempo a la vieja Sudáfrica. Esta Comisión y los organismos legislativos del mundo entero tienen el poder de prevenir que esta oposición mantenga el statu quo en Sudáfrica.

Al ayudar, y no impedir, el proceso de reformas, se pueden realizar cambios aún más rápidos. El estar a favor de la acción, en vez de reaccionar en contra de los acontecimientos de Sudáfrica, proporciona a las Naciones Unidas la oportunidad de ayudar a moldear la nueva Sudáfrica y no sólo permanecer pasiva y emitir juicios sobre su éxito o su fracaso. Uno de los objetivos originales de las Naciones Unidas es promover cambios positivos. Es cierto que la situación en Sudáfrica pide que las Naciones Unidas trabajen en pro de dicho objetivo y ayuden a los que intentan cambiar el sistema desde

adentro. En muchas ocasiones hemos visto que es difícil cambiar bajo la bandera de "reformas, no revolución", pero Sudáfrica tiene una oportunidad real de conseguir el éxito. Con la ayuda de esta Comisión, las Naciones Unidas tomarán por el buen camino. El efectuar cambios positivos y premiarlos debe ser la clave de la nueva política de las Naciones Unidas para Sudáfrica.

Es cierto que Sudáfrica todavía tiene que superar varios obstáculos, pero la aceptación de la comunidad mundial ayudará a la nación a alcanzar cimas que parecían inalcanzables hace sólo un año. Si el mundo no ha aprendido nada más el pasado año, que recuerde que ningún objetivo es inalcanzable, ninguna montaña es demasiado alta, ninguna lucha es demasiado larga o demasiado dura para alcanzar la victoria final. Todos los rincones del mundo se han visto afectados por cambios dramáticos y extensos y Sudáfrica no es una excepción.

Pero aunque se han eliminado casi completamente las leyes del apartheid de los libros de Sudáfrica, las actitudes de muchos todavía no reflejan los cambios que el Gobierno, los dirigentes empresariales y otros han luchado tanto por conseguir. La mayoría de nosotros sabe demasiado bien que las semillas del racismo son difíciles de eliminar. Pueden durar años y en muchos casos nunca se eliminarán completamente. Por tanto, es aún más asombroso que, teniendo en cuenta el ambiente hostil en Sudáfrica, esté surgiendo un orden nuevo, plenamente democrático y no racista.

Con la nueva Sudáfrica formándose en el horizonte, ha llegado el momento de variar el rumbo para reflejar también las actitudes cambiantes de Sudáfrica. Las tácticas aislacionistas que deterioran la vida económica de Sudáfrica ya no serán útiles a las Naciones Unidas o a cualquier nación. Los cambios en Sudáfrica, que el Presidente Bush y los dirigentes de muchas naciones occidentales han aplaudido como "irreversibles", sólo serán eficaces si las Naciones Unidas y otras organizaciones reconocen su importancia y toman medidas para apoyarlos.

Los reformadores en Sudáfrica han arriesgado básicamente todo para recuperar a su nación del borde del aislamiento internacional. Por medio de una participación activa en Sudáfrica, los gobiernos y empresas de todo el mundo pueden tener un efecto positivo sobre el rápido desarrollo de una estructura social y económica en Sudáfrica, construida sobre una base totalmente nueva, una que se enfrente a los graves problemas del pasado con un

nuevo pensamiento y proporcione a todos los individuos la posibilidad de ser miembros contribuyentes de la comunidad. Mientras hablamos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben preparar propuestas para ayudar a que despegue el novel desarrollo económico, pero sólo lo harán después de recibir la aprobación de este organismo. Se precisa una muestra de apoyo a las amplias iniciativas del Gobierno de De Klerk y los demás que trabajan para lograr cambios positivos, y este debe ser el resultado de esta audiencia.

No obstante, esto no significa que todo funcione bien en Sudáfrica. Sólo hay que leer los periódicos para enterarse de las horribles atrocidades que otros negros causan a la población negra. Desde agosto pasado han muerto entre 800 y 1.000 negros en rivalidades pseudopolíticas entre las facciones de los zulúes y los xhosas, y el número aumenta todos los días. Algunas personas que infligen violencia han sido animadas a la acción por conservadores de ultraderecha que piensan que la inestabilidad es su aliado. Sin embargo, la mayoría de los sudafricanos quieren ayuda de la comunidad internacional. Los llamamientos se hacen a diario, pero debemos escuchar y actuar en consecuencia.

Con demasiada frecuencia, el no haber logrado responder a los cambios trascendentales hacia la democracia ha conducido a su desaparición, y no podemos permitirnos correr ese riesgo en Sudáfrica, una nación de la que depende toda la región subsahariana para su vida económica. Favorecida por la economía más productiva de la región, Sudáfrica ha proporcionado trabajo a miles de personas de diversas culturas que la habitan. El apoyo a un mecanismo económico sudafricano que no trabaje basándose en una teoría racial puede resultar muy valioso para toda el Africa meridional. Sin embargo, el hacer caso omiso de ello en forma constante puede causar dificultades tanto económicas como políticas, que dejarán a generaciones de africanos meridionales sin esperanzas ni sueños.

Es tarea de esta Comisión aprovechar las circunstancias para contribuir aún más a que se produzcan cambios mayores en Sudáfrica. Las ideas y acciones de esta Comisión han de moldear la faz de toda la región subsahariana y ello no ha de llevarse a cabo con demasiada rapidez ni con ideas preconcebidas. Observemos los cambios positivos que se han producido y percatémonos de que su éxito reiterado dependerá del apoyo y el aliento de órganos como éste. Busquen un nuevo futuro para Sudáfrica; por favor no la pongan entre la espada y la pared.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): El orador siguiente es el representante del National Center for Public Policy Research, el Sr. David A. Ridenour.

Sr. RIDENOUR (interpretación del inglés): Agradezco esta oportunidad de formular una declaración sobre un tema de importancia fundamental, a saber, la situación cambiante de Sudáfrica.

Cuando se eligió a F. W. De Klerk Presidente del Estado de Sudáfrica, en septiembre de 1989, nadie previó los marcados cambios que tendrían lugar bajo su liderazgo. En sólo poco más de un año, De Klerk ha desmantelado elementos del apartheid que se construyeron durante cientos de años. Como muchos de ustedes saben, la segregación racial en Sudáfrica no es simplemente un

fenómeno del siglo XX, sino que se remonta al siglo XVII. Las propias Naciones Unidas reconocieron recientemente los logros de De Klerk, al afirmar en un informe de julio que Sudáfrica "había llegado al umbral de una nueva era" de democracia no racial.

A continuación sigue un examen en orden cronológico de las reformas más significativas emprendidas por De Klerk.

El 16 de noviembre de 1989, el Presidente De Klerk anunció que la Ley de reservación de instalaciones separadas, una de las piedras angulares del pequeño apartheid, se derogarían y que todas las razas tendrían acceso a todas las playas públicas. Como muchos representantes saben, la Ley de reservación de instalaciones separadas establecía una segregación estricta de los servicios públicos.

El 28 de noviembre de 1989, el Gobierno de Sudáfrica anunció que los órganos de seguridad en Sudáfrica quedarían por primera vez bajo control civil.

En febrero de este año, De Klerk no sólo liberó a Nelson Mandela, sino que legalizó todas las organizaciones anti-apartheid previamente prohibidas o cuya actuación era restringida, incluyendo el Congreso Nacional Africano (ANC), el Partido Comunista de Sudáfrica y el Congreso Panafricanista de Azania (PAC); derogó las restricciones a los medios de difusión relativas a los disturbios políticos y levantó la prohibición de actividades políticas en las escuelas.

En junio pasado, De Klerk levantó el estado de emergencia impuesto hace cinco años en todas las provincias, excepto Natal con la esperanza de que se lograra una solución con respecto a la destructiva violencia política entre el Congreso Nacional Africano y el Movimiento Inkatha. Luego de dos meses, también se levantó el estado de emergencia en Natal.

El Gobierno de De Klerk inició negociaciones de buena fe con el Congreso Nacional Africano poco después de la liberación de Mandela y de otros presos por razones de seguridad, con miras a emprender negociaciones sobre una nueva nación no racial. Esas conversaciones dieron lugar a la ratificación de dos acuerdos entre el Gobierno y el ANC, a saber, la Minuta de Groote Schuur y la Minuta de Pretoria. Las anteriores, entre otras cosas, comprometían a ambas partes a un proceso pacífico de negociación y establecían los procedimientos para resolver la controversia entre el Gobierno y el ANC sobre los presos

políticos. Al hacerlo, la Minuta de Groote Schuur, aprobada en mayo de 1990, sentó las bases para la aprobación de la Minuta de Pretoria, el 6 de agosto de 1990. La Minuta de Pretoria y los acuerdos relacionados con ella dieron fin oficialmente a la cuestión de los presos políticos de Sudáfrica al establecer una definición de "preso político" acordada por el ANC y el Gobierno de Sudáfrica y al fijar un calendario y los procedimientos para la liberación de dichos presos. La Minuta de Pretoria especifica que "bajo ciertas circunstancias, un delito 'común' - incluso uno grave como el homicidio - puede considerarse un delito político" si puede hallarse un motivo político. Al acordar una definición tan amplia de "preso político", el Gobierno de De Klerk demostró claramente su compromiso con el proceso de negociación.

Es evidente que los cambios que han ocurrido en Sudáfrica en meses recientes no tienen precedentes. Algunos analistas han relacionado los cambios en Sudáfrica al glasnost de Mijail Gorbachev. Pero en esta comparación hay algo más que meras reformas. F. W. De Klerk, no en menor medida que el líder soviético Mijail Gorbachev, enfrenta un desafío a su liderazgo, y sin De Klerk el programa de desmantelamiento del sistema de apartheid correría peligro.

El Presidente De Klerk enfrenta tres amenazas principales a su liderazgo. La primera es la oposición parlamentaria. La oposición a las políticas de reforma de De Klerk por elementos de extrema derecha dentro del electorado blanco, junto con la aparente incapacidad del Partido Nacional de detener la corriente de sanciones económicas punitivas han hecho que ese partido perdiera muchos votos en años recientes. Por ejemplo, en septiembre de 1989, el Partido Nacional obtuvo la mayoría más pequeña en el Parlamento sudafricano en sus 41 años de historia, perdiendo mucho terreno ante el Partido Conservador, que está a favor del apartheid. En esas elecciones, el Partido Conservador aumentó su representación casi en un 80%, reuniendo el 45% del voto de los sudafricanos blancos, un 1% menos que el Partido Nacional. Una mayoría de los votantes sudafricanos pertenecen a dicho grupo. En un esfuerzo aparente por aprovechar la decadencia del Partido Nacional, el Partido Conservador ha solicitado en varias ocasiones a De Klerk que celebre un referéndum entre el electorado blanco sobre sus iniciativas de reforma y su insistente llamamiento a nuevas elecciones parlamentarias. Más recientemente, en marzo pasado, una encuesta confidencial del Partido Nacional demostró que el

Partido Conservador - que está a favor del apartheid y de la supremacía blanca - obtendría más del 50% de los votos si se celebraran elecciones (un aumento del 31% respecto de la elección anterior). Sin duda, el apoyo al Partido Nacional ha continuado reduciéndose desde entonces. En el tercer trimestre de este año, Sudáfrica ha tenido una reducción del 2,1% de su producto nacional bruto, debida en parte a las sanciones internacionales y la desinversión, constituyendo la cuarta reducción trimestral consecutiva.

La segunda amenaza principal al liderazgo de De Klerk son los desafíos dentro del partido. Los representantes de la línea dura dentro del Partido Nacional, tales como el Ministro de Orden y Justicia, Adriaan Vlok, ya han indicado sus objeciones a algunas de las conocidas reformas de De Klerk. A principios de este año, hubo indicios de que el ex Presidente P. W. Botha, del Partido Nacional, trataría de volver al escenario político para oponerse a De Klerk. En el pasado tales conflictos dieron lugar a divisiones irreconciliables y a la formación de otros partidos políticos. En 1969, por ejemplo, cuatro miembros del Parlamento, disidentes del Partido Nacional, fundaron el Partido Nacional Renovado debido a un desacuerdo en cuanto al programa de deportes del Primer Ministro, B. J. Vorster. En 1982, 16 parlamentarios del Partido Nacional se separaron de éste para formar el Partido Conservador, cuando el Primer Ministro P. W. Botha sugirió que era posible un gobierno multirracial.

La tercera amenaza proviene de militantes de derecha e izquierda. El año pasado aumentó en gran medida el terrorismo político en Sudáfrica, tanto de derecha como de izquierda, como resultado del rápido desmantelamiento del apartheid. Sólo durante los primeros 10 meses de 1990 hubo 314 incidentes, comparados con 193 en todo 1989. Estas cifras no incluyen los miles de actos de violencia que se estima ocurrieron entre miembros del ANC y el Movimiento Inkatha del Jefe Buthelezi. El espacio político que se abrió con las reformas de De Klerk ha permitido que el ANC trabaje libremente en todo el país, pero el ANC no trabaja siempre utilizando medios pacíficos. El 9 de agosto, tres días después de haber acordado suspender su lucha armada, el líder del ANC en la Provincia de Natal, Harry Gwala, afirmó:

"Ha pasado ya la hora de dar bofetadas a la gente. Ahora vamos a pelear con los AK-47."

En las dos semanas siguientes, el ANC cometió por lo menos 13 actos de terrorismo. Uno de los ataques más importantes del ANC fue el realizado en la ciudad de Ermelo, en el Transvaal oriental, donde el ANC patrocinaba un boicoteo de consumidores. Ese día, un militante del ANC atacó con granadas la casa del Consejero negro de la ciudad, Mpshali. El perpetrador fue Vusi Kubheka, quien ingresó a Sudáfrica desde Botswana el 8 de agosto. Kubheka dijo que sus órdenes eran proseguir con la lucha armada pese a la llamada suspensión. Es igualmente alarmante la determinación de las organizaciones de extrema derecha de impedir la democracia multirracial mediante la fuerza de las armas. A principios de este año hubo informes en los que se afirmaba que extremistas de derecha planeaban asesinar al Presidente De Klerk y a Nelson Mandela. Asimismo, se decía que durante la violencia en los barrios entre el ANC y el Movimiento Inkatha los derechistas asesinaban en forma selectiva y actuaban como francotiradores para incitar aún más a la violencia.

Sin embargo, me pregunto si la reducción o mejoramiento de las sanciones internacionales sería congruente con las condiciones establecidas por las Naciones Unidas. Creo que la respuesta es afirmativa.

En diciembre último, las Naciones Unidas fijaron las cinco condiciones siguientes para eliminar las sanciones internacionales punitivas contra Sudáfrica.

La primera condición era la legalización de los grupos políticos prohibidos y del derecho de todos los grupos políticos a organizar y efectuar protestas, etc. Esta condición se satisfizo plenamente en febrero de este año cuando se levantó la prohibición de más de 60 grupos anti-apartheid, incluido el Congreso Nacional Africano (ANC), el Partido Comunista de Sudáfrica, la Organización Popular de Azania y el Congreso Panafricanista de Azania (PAC).

La segunda era la liberación de todos los presos políticos. Esta condición fue cumplida al firmarse la Minuta de Pretoria. Este acuerdo proporcionó términos mutuamente aceptables para el arreglo de la cuestión de los presos políticos entre el Gobierno y el ANC.

La tercera era la finalización del gobierno mediante decretos de emergencia. Esta condición también ha sido ampliamente satisfecha. Las normas del estado de emergencia, que se aplicaban desde hacía cinco años, fueron derogadas en toda Sudáfrica. La restante legislación en materia de seguridad está sometida a estudio, tal como se especificó en la Minuta de Pretoria.

La cuarta era la cesación de todos los juicios y ejecuciones por motivos políticos. Parece que esta condición también ha sido cumplida. Ahora que la cuestión de los presos políticos se ha resuelto de manera mutuamente aceptable, la cuestión de los juicios políticos es sumamente discutible. En lo que se refiere a las ejecuciones, F. W. De Klerk ya ha declarado una moratoria temporaria de ellas hasta que puedan mejorarse las leyes sobre aplicación de la pena de muerte mediante el proceso de negociación.

La Quinta condición era la retirada de todas las tropas sudafricanas de las barriadas populares. Esta es la única condición que el Gobierno de Sudáfrica dista mucho de haber cumplido. Pero, en las circunstancias actuales, se trata también de una condición no razonable y carente de realismo. A fines del verano pasado y principios de este otoño, la violencia política interna entre el ANC y el Movimiento Inkatha dio por resultado la muerte de cerca de 1.000 negros sudafricanos en las barriadas populares. Inclusive el ANC de Nelson Mandela

reconoció la necesidad de una presencia militar de ese tipo. El 21 de junio, en el programa "A Town Meeting with Nelson Mandela", transmitido por la cadena de televisión ABC, Mandela dijo:

"Ningún gobierno del mundo puede tolerar una situación de violencia en la que han muerto casi 4.000 personas sin intervenir."

Mientras la amenaza de la violencia de negros contra negros persista en las barriadas populares, la retirada de las tropas de esos sitios está más allá del control del Gobierno sudafricano.

Un aspecto final al que quiero referirme brevemente es el efecto que las sanciones económicas internacionales contra Sudáfrica han tenido sobre las mismas personas a las que se pretendía ayudar, es decir, los sudafricanos negros. Se reconocen ahora en general que los negros de Sudáfrica han sufrido la mayor parte de las consecuencias negativas de las sanciones económicas punitivas. Según un cálculo, para el año 2000, podrían perderse alrededor de 2 millones de empleos para negros a raíz de las sanciones internacionales. Esta repercusión se refleja prácticamente en todas las encuestas de opinión negra realizadas en Sudáfrica desde 1984.

Daré algunos ejemplos. En 1984, una encuesta de trabajadores negros realizada por Lawrence Schlemmer para el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el 75% de los 551 negros encuestados se oponía a las sanciones. En agosto y septiembre de 1987, Mark Orkin, de la Community Agency for Social Enquiry, llevó cabo una encuesta de 800 negros sudafricanos, con el resultado de que el 60% de quienes respondieron dijo que se opondría a las sanciones si ellas trajeran por consecuencia la pérdida de empleos para negros. En marzo de 1989, Gallup, esa organización de encuestas tan respetada, realizó una encuesta de negros en la que el 75% de los participantes se opuso a las sanciones económicas punitivas, incluyendo a un 65% de encuestados partidarios del ANC. La prueba es simplemente abrumadora: los negros sudafricanos se oponen a las sanciones porque son los que más sufren a raíz de ellas.

Para terminar, quiero agregar solamente que, en mi opinión, si se levantaran las sanciones ahora la comunidad internacional podría contribuir a que Sudáfrica se dirigiera hacia un futuro democrático multirracial mediante la promoción de la estabilidad. Recuerden que la meta de las sanciones, en primer lugar, no fue solamente desmantelar el apartheid sino reemplazarlo por un sistema democrático. Sudáfrica no debería simplemente reemplazar una

tiranía por otra. Además, si bien creo que el proceso de reforma que se lleva a cabo en Sudáfrica es ciertamente irreversible, nada impide que la comunidad internacional vuelva a imponer las sanciones si el Gobierno de Sudáfrica da marcha atrás y comienza a reconstruir el antiguo sistema de apartheid. Las estructuras que han luchado tan duramente a nivel internacional para desmantelar el apartheid y que lo han hecho con tanto éxito, seguirán existiendo y las sanciones podrían volverse a imponer fácilmente.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Tiene la palabra el representante de la Asociación de Bibliotecarios Progresistas, Sr. Joseph D. Reilly.

Sr. REILLY (interpretación del inglés): Me siento honrado al tener otra oportunidad de dirigirme a la Comisión Política Especial.

El año pasado demostré ante la Comisión que el compromiso de las organizaciones bibliotecarias nacionales e internacionales con el movimiento de liberación de Sudáfrica fue no sólo insignificante sino a menudo contraproducente. Este año podría haber informado lo mismo si no hubiera sido por el hecho de que los cuerpos de bibliotecarios en Sudáfrica, los Estados Unidos, Escandinavia y otros lugares se mostraron más impacientes con los dirigentes de sus organizaciones y avanzaron progresivamente hacia la realineación de los bibliotecarios con la política, las estrategias y los objetivos del movimiento de liberación.

En los Estados Unidos, la Asociación de Bibliotecarios Progresistas se formó no mucho después de mi intervención aquí, en noviembre pasado. En la actualidad tiene más de 200 miembros en 26 Estados y figura a la vanguardia de la lucha por mantener el boicoteo cultural y académico según la definición de los lineamientos establecidos en mayo de 1989 por el Congreso Nacional Africano (ANC). Con esa finalidad, la Asociación se unió a otros integrantes de la American Library Association (ALA) para evitar que la poderosa industria editorial de los Estados Unidos, representada por la Association of American Publishers, recibiera la aprobación o carta blanca del ejecutivo de la ALA para volver a entrar al mercado del apartheid.

La Asociación alertó al ANC y órganos pertinentes del Movimiento Democrático de Masas acerca del hecho de que ese grupo de apoyo estaba tratando de romper

el boicoteo. En la conferencia de mediados de invierno celebrada por la ALA en enero de 1990, el representante del ANC ante las Naciones Unidas, Sr. Tebogo Mafole, formuló una declaración en la que expuso la política del movimiento de liberación sobre las relaciones con Sudáfrica. Esa declaración contribuyó a frenar una resolución que pedía la finalización del boicoteo.

En la conferencia anual de la ALA, realizada en junio de 1990, el grupo de apoyo de los editores hizo otro intento por quebrar el boicoteo: pidió una declaración del Congreso de Escritores Sudafricanos en una forma muy engañosa, y luego citó esa declaración fuera de contexto para favorecer sus propios objetivos. Nosotros advertimos al Congreso sobre esta falsificación y entonces envió una segunda declaración en la que expresó, en términos inequívocos, que estaba comprometido con la política propugnada por el movimiento de liberación y que ninguna declaración que éste formulara podría interpretarse en el sentido de que estaba propiciando una interrupción del boicoteo. Como resultado de esto y del poderoso testimonio del gran poeta sudafricano Dennis Brutus, así como de los testimonios de bibliotecarios de prácticamente todos los sectores de la ALA, el ejecutivo se vió obligado a elaborar una resolución oficial en la que manifestaba que no se haría eco del llamado de las editoriales para poner fin al boicoteo.

A nivel internacional, los miembros del ANC, la Asociación de Bibliotecarios Progresistas, el grupo BIS de los bibliotecarios escandinavos, la Library and Information Worker's Organization, de Sudáfrica, y otros hicieron una manifestación en la conferencia anual celebrada por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA) en agosto de 1990. Al no establecer ninguna calificación para los delegados que podían representar a los bibliotecarios sudafricanos, la IFLA por cierto impartió sus bendiciones a los bibliotecarios del apartheid que han defendido siempre la censura del apartheid, la educación del apartheid y las instalaciones separadas del apartheid. Bibliotecarios como esos permiten que en sus bibliotecas se nieguen los servicios a ciudadanos que, por la pigmentación de su piel, no soportan tenerlos entre ellos. Cuando hace unas pocas semanas el Gobierno de De Klerk derogó la Ley de reservación de instalaciones separadas de 1953, lo hizo de una manera muy irresponsable. Hay tantas escapatorias ahora que cualquier municipalidad que quiera impedir a grupos de ciudadanos que utilicen sus instalaciones podría hacerlo con facilidad.

Como resultado, vemos que la biblioteca pública de Witbank creó un "depósito" de 7,80 dólares sobre los libros que retiran los llamados no residentes. Dado que todos los residentes de Witbank son blancos, según lo dispone la Ley sobre zonas reservadas, se mantiene a la biblioteca pública como una institución apartheid. La biblioteca de Bethel tomó medidas aún más fuertes y decretó un pago anual de 200 dólares para los llamados no residentes. Pero el mejor esfuerzo por impedir el acceso público a las bibliotecas públicas lo hicieron los ilustrados administradores de la biblioteca pública de Newcastle, quienes simplemente la declararon cerrada al ingreso de los llamados nuevos miembros. Durante los festejos de la Carta de la Libertad, en junio, los interesados de la ciudad de Ashtown fueron expulsados de la biblioteca pública sólo para blancos cuando trataron de solicitar el ingreso. Estos ciudadanos hicieron entonces una manifestación, llegó la policía y les dio cinco minutos para dispersarse. Luego dispararon sobre ellos con perdigones, lo que dio lugar a que algunos resultaran gravemente heridos. Esas personas estaban allí para celebrar esa parte de la Carta de la Libertad que dice que "Se abrirá las puertas de la cultura y la educación". Parece que la junta municipal de Ashtown piensa de otra manera.

El hecho es que la organización de bibliotecas, que cuenta con la aprobación del Gobierno - la South African Institute of Library and Information Science (SAILIS) - no ha elevado aún su voz respecto de ninguno de estos incidentes. El año pasado hablé en la Comisión sobre Joyce Mabudafhasi, bibliotecaria que es también una activista dirigente del Frente Democrático Unido. Luego que su casa fuera objeto de un atentado con bombas a mediados del decenio de 1980, la detuvieron entre 1986 y enero de 1989. ¿Protestó por ello SAILIS? ¿Exigió que se la liberara inmediatamente? ¿Organizó a otros bibliotecarios para que intercedieran por ella? No; y parece que hace unas pocas semanas se atentó una vez más contra la vida de esa mujer tan valiente. ¿Por qué SAILIS no intercedió por su colega? Es evidente que Joyce no es su colega: se trata de una bibliotecaria que participa en la liberación de Sudáfrica del yugo del apartheid, y SAILIS es una organización que trabaja para mantener la actual situación de apartheid en Sudáfrica.

Un grupo de bibliotecarios sudafricanos que se cansó de SAILIS fundó en julio de 1990 otra entidad, la Library and Information Workers Organization (LIWO). Es una nueva organización que sostiene los principios de la Carta de la Libertad, y si bien todavía tiene una base regional piensa convertirse en un año o dos en una estructura nacional de bibliotecarios. Esa organización está planteando importantes interrogantes sobre los bibliotecarios sudafricanos. ¿Es posible que los bibliotecarios actuales olviden las viejas prácticas y la vieja ideología profesional? Si fuera posible, ¿qué debería hacerse para reparar el daño provocado por el apartheid a las colecciones de libros? ¿Puede la presente estructura de las bibliotecas servir a los intereses de una Sudáfrica en que no se discrimine en virtud de la raza ni del sexo, democrática y en la que se practique la redistribución?

Al inaugurarse esa nueva estructura el Departamento de Arte y Cultura del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica indicó lo siguiente:

"Su tarea, camaradas, es de gigantes: nada menos que crear un nuevo orden de información para una nueva Sudáfrica."

En una manifestación que tuvo lugar el verano pasado contra la African Broadcasting Company se expresó un sentimiento similar. Los trabajadores llevaban carteles que decían "Liberar las ondas", "El pueblo ha de transmitir", y "Democratizar, no privatizar". ¿No es ese un aspecto clave de la edificación de una nueva Sudáfrica? ¿No nos trae inmediatamente el recuerdo de la batalla librada en este mismo edificio bajo la dirección de gente tan importante como el difunto Sean MacBride en pro de un nuevo orden mundial de información y comunicación?

El motivo por el cual el grupo de cabilderos de la industria editorial de los Estados Unidos se puso en contacto con los bibliotecarios para obtener su aprobación al reingreso de la Sudáfrica del apartheid es que compramos a los cabilderos, todos los años, material por un valor de 4.500 millones de dólares. Su grito de batalla era que el boicoteo de los libros impedía "la corriente libre de información". Pero todos sabemos qué quiere decir la corriente libre de información occidental o, más específicamente aún, la corriente libre de información noroccidental. Y aunque algunos de los Estados Miembros aquí presentes tuvieron una reacción bastante violenta ante el nuevo

orden mundial de información de comunicación, y otros rechazaron como una simple abstracción el concepto de la hegemonía cultural, no se puede negar que los conglomerados de información y de comunicación fueron utilizados para otros servicios.

Antes de morir, en 1988, Sean MacBride escribió:

"El control de los medios de información, escrita y electrónica, es de importancia fundamental para quienes quieren desestabilizar a un gobierno o crear tiranteces en distintas partes del mundo."

Los bibliotecarios desempeñan un papel importante en ese terreno.

El último número del Library Journal publica una carta de un bibliotecario descontento que se queja de que la profesión no debiera aplaudir a quienes ponen a disposición del público material que pueda socavar la seguridad nacional. Tenemos demasiado triste memoria de lo que se ha hecho en nombre de la seguridad nacional: el Irán y Guatemala en los años de 1950; el Congo, Viet Nam, el Brasil, Indonesia y la República Dominicana en los de 1960; Chile y Angola en los de 1970; Nicaragua durante los de 1980; y tantos otros que son demasiados como para enumerarlos hoy aquí.

Los bibliotecarios de los Estados Unidos tienen la responsabilidad de dar acceso a cualquier material que pertenezca a esas actividades repugnantes, y a difundirlo. Si el Secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, dice que los Estados Unidos brindarán consejo electoral y político a Sudáfrica por intermedio del National Endowment for Democracy, es deber del bibliotecario proporcionar información correspondiente a la historia y las actividades de esa organización. Si un bibliotecario tuviera información sobre algo que pudiera ocurrir en este momento en la Faja de Caprivi, su deber sería el de hacerla pública.

En conclusión, pido a los Estados Miembros, sobre todo a los pertenecientes al Movimiento de los Países No Alineados, que alienten el desarrollo de un nuevo orden de información en la nueva Sudáfrica. Quienes han participado activamente en sus respectivos países para democratizar sus sectores de información y de comunicación deberían establecer y mantener relaciones con los cuerpos pertinentes de los movimientos de liberación. Sus organizaciones bibliotecarias nacionales deberían establecer relaciones con la nueva organización bibliotecaria de Sudáfrica que describí antes.

El pueblo de Sudáfrica trabaja día y noche para obtener su liberación; pero sus adversarios también trabajan constantemente, por lo que es fundamental que actuemos a plenitud como profesionales para apoyar al movimiento de liberación del Congreso Nacional Africano e impedir que arraiguen las semillas de la desestabilización. Los datos, la documentación, la información y el conocimiento son los instrumentos de que disponemos para exponer a la luz esas actividades delictivas.

Debo decir también que la Comisión Política Especial cumple un gran servicio al brindar este foro a personas que no pertenecen al círculo diplomático. Las victorias que hemos obtenido en la esfera de nuestra profesión se han debido en gran medida a la oportunidad que nos dio el Comité el año pasado. Tenemos la firme esperanza de volver el año próximo a informar sobre nuevos logros.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La Comisión se volverá a reunir mañana, martes 27 de noviembre, a las 15.00 horas, en la Sala de Conferencias 2, para continuar y terminar las audiencias con relación al tema 34 del programa, titulado "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica".

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.